



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

L-128634-1

"C. R. B. c/ Fisco de la Provincia de Buenos
Aires y otro/a s/ Accidente In- Itinere"
L. 128.634

Suprema Corte de Justicia:

I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción promovida por R. B. C. contra la Provincia de Buenos Aires, en reclamo de la indemnización derivada del siniestro acaecido el día 26 de marzo de 2017, condenando, en consecuencia, a la demandada a abonar las sumas que fijó en concepto de prestación dineraria por incapacidad física, parcial y definitiva, con más -por mayoría- la aplicación de intereses moratorios a la tasa activa promedio, cartera general nominal anual del Banco de la Nación Argentina, desde la mora en el cumplimiento de la sentencia y hasta su efectivo pago; todo ello, con apoyo en lo prescripto por los arts. 6, 7, 12, 14 y cctes. de la ley 24.557, texto según ley 27.348 (v. veredicto y sentencia definitiva del 25-XI-2021).

II. Contra lo así resuelto se alzó la Fiscalía de Estado en representación de la accionada vencida, por apoderada, a través del recurso extraordinario de nulidad plasmado en el escrito electrónico del 16-XII-2021, cuya concesión dispuso el colegiado de origen en fecha 17-XII-2021.

III. Recibidas las actuaciones en esta Procuración General a mi cargo con motivo de la vista conferida por ese alto Tribunal el 5-V-2022, según consigna el oficio electrónico cursado en idéntica fecha, procederé a emitir opinión con arreglo a lo normado por los arts. 296 y 297 del Código Procesal Civil y Comercial.

En dicha pieza invalidante la recurrente denuncia que en el pronunciamiento impugnado el sentenciante de grado ha incurrido en omisión de cuestiones que juzga esenciales para arribar a la correcta resolución del pleito, déficit que, según su ver, importa violación del art. 168 de la Constitución provincial.

En el aludido carácter, menciona el reproche dirigido a impugnar la validez constitucional del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 con las reformas introducidas por el art. 11 de la ley 27.348 que, vale recordar, establece, por un lado, las pautas para determinar el valor del ingreso base salarial que debe tomarse como módulo para

el cálculo de la cuantía de las prestaciones dinerarias previstas en el régimen especial citado. Ello, en cuanto el primer párrafo del actual texto de dicho precepto legal dispone en forma expresa que "*(...) a los fines del cálculo del valor del ingreso base, se considerará el promedio mensual de todos los salarios devengados de conformidad con lo establecido por el artículo 1° del Convenio N° 95 de la OIT (art. 12.1, ley 24.557, texto según ley 27.348) y actualizados de conformidad a la variación del índice RIPTE(...)*". Y, para completar este proceso, la norma bajo análisis establece que corresponde aplicar un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, respecto del importe previamente obtenido; ello, desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva (art. 12, inc. 2° de la Ley 24.557, texto según ley 27.348). Por otro lado, el inciso tercero de la norma en cuestión prevé que a partir de la mora en el pago del monto de condena será de aplicación lo estipulado por el artículo 770 del Código Civil y Comercial, acumulándose los intereses al capital, devengando su producido intereses conforme la tasa activa anteriormente mencionada, hasta la efectiva cancelación.

En ese sentido, manifiesta que, en el caso, a los fines del cálculo de la indemnización otorgada a la trabajadora, el órgano colegiado aplicó lisa y derechamente el art. 12 de la ley 24.557 (texto según ley 27.348), norma cuya declaración de inconstitucionalidad había sido expresamente peticionada por su parte en el capítulo VII del escrito de contestación de demanda del 20-III-2018 obrante a fs. 51/63 vta con sustento en sostener que introduce un mecanismo indexatorio que vulnera el derecho de propiedad de su representada al obligarla a pagar una prestación resarcitoria actualizada que resulta confiscatoria, a la par que transgrede el principio rector que rige en nuestro país que prohíbe la repotenciación de deudas (art. 17, Constitución nacional).

Destaca que tal planteo resultaba prioritario y de carácter esencial para la adecuada resolución de la causa, no obstante lo cual su tratamiento fue soslayado por los magistrados intervinientes.



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

L-128634-1

IV. En mi opinión, el remedio procesal bajo examen admite procedencia, si bien con el alcance parcial que *infra* indicaré.

Liminarmente cabe recordar que cuestiones esenciales son aquellas que conforman la estructura de la litis y el esquema jurídico que la sentencia debe necesariamente atender para la solución del pleito, carácter que corresponde asignar al planteo que se sindicó preterido en el pronunciamiento, toda vez que así lo ha reconocido ese alto Tribunal al decir que: "*la alegación de inconstitucionalidad de una norma, constituye, por su naturaleza, cuestión esencial en los términos del art. 168 de la Carta local*" (conf. S.C.B.A., causas L. 93.238, sent. de 13-VIII-2008; L. 96.246, sent. de 6-X-2010 y L. 99.171, sent. de 16-II-2011, entre otras).

Ello sentado, he de señalar que el somero repaso de las alegaciones desplegadas en los escritos constitutivos del proceso permite observar que el Fisco accionado objetó la validez constitucional del art. 11 de la ley 27.348, modificatorio del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo 24.557, en oportunidad de contestar la acción, impugnación que fue objeto de debida sustanciación, sin perjuicio del silencio que sobre el particular guardó la legitimada activa (v. presentación electrónica de 24-V-2018 glosada a fs.124/127 vta).

Ahora bien, la simple lectura del decisorio objetado pone al descubierto, según mi apreciación, que el planteo que se invoca preterido no ha merecido respuesta alguna por el tribunal de origen quien, luego de tener por acreditada la incapacidad laborativa que porta la accionante como consecuencia del accidente de trabajo sufrido, procedió a declarar el progreso de la acción impetrada en los términos de las previsiones contenidas en los arts. 1, 6, 12, 14 y cc. de la ley 24.557, para a continuación establecer el importe correspondiente de acuerdo a las pautas contenidas en el art. 12 de la ley 24.557 con las modificaciones introducidas por la ley 27.348 que juzgó de aplicación al caso, soslayando de ese modo formular consideración alguna en torno de los reproches constitucionales dirigidos a cuestionar el método de actualización previsto en el precepto legal citado.

Siendo ello así, no cabe sino tener por patentizado el vicio omisivo que, con razón, se denuncia en la protesta al amparo del art. 168 de la Carta provincial, conclusión que no se ve enervada, en mi parecer, por las consideraciones formuladas por el señor juez que

votó en tercer término en el acuerdo, doctor Escobares, con relación a la cuestión de marras, puesto que tales reflexiones solo traducen su convicción personal que no integraron la decisión contenida en la sentencia al no haber concitado la adhesión de los restantes magistrados integrantes del órgano actuante (conf. S.C.B.A., causas L. 105.323, sent. de 30-XI-2011; L. 104.112, sent. de 6-XI-2012 y L. 111.160, sent. de 27-II-2013, entre otras).

Estimo, sin embargo y tal como anticipé párrafos arriba, que la preterición cometida por el colegiado de origen respecto del aludido planteo de inconstitucionalidad sólo ha de acarrear la anulación parcial del pronunciamiento limitada al segmento de la decisión que a la actualización del ingreso base salarial y al cálculo de intereses se refiere. Ello así, pues declarar la nulidad de los restantes aspectos de la resolución deviene innecesario y configuraría un dispendio jurisdiccional, con afectación del rendimiento del servicio de administración de justicia, siendo que, en rigor, nada impide que ese alto Tribunal ejerza, a su respecto, la función revisora, satisfaciendo los fines de la casación (conf. S.C.B.A., causas L. 80.137, sent. de 6-IX-2006; L. 105.733, sent. de 26-VI-2013).

V. En tales condiciones y en virtud de las consideraciones hasta aquí vertidas estimo que esa Corte debería hacer lugar, con el alcance parcial señalado, al recurso extraordinario de nulidad que dejo examinado.

La Plata, 11 de agosto de 2022.-

Digitally signed by
Dr. CONTE GRAND, JULIO
MARCELO
Procurador General de la
Suprema Corte de Justicia
PROCURACION GENERAL -
PROCURACION GENERAL
Procuracion General

11/08/2022 11:01:15